

Comunicado de la CLADE en solidaridad al pueblo brasileño y en repudio a las actuales políticas del gobierno nacional ante la pandemia COVID-19

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), red plural de organizaciones de la sociedad civil que defienden el derecho humano a una educación pública, gratuita, laica, transformadora, inclusiva y a lo largo de la vida para todas y todos, como responsabilidad de los Estados, expresa su solidaridad con el pueblo brasileño ante el crecimiento rápido del número de contagios y muertes por la pandemia COVID-19 en el país, en los últimos días. A la vez, quiere manifestar su solidaridad y apoyo a la sociedad brasileña, ante el descaso público de la presidencia de Jair Bolsonaro respecto a la gravedad de la crisis sanitaria que el país y el mundo enfrentan.

Por veces, el gobierno brasileño se ha pronunciado menospreciando los impactos y riesgos del COVID-19 para la vida y la salud humanas, y ha defendido públicamente la reducción de las medidas de prevención y distanciamiento social ante la pandemia. Incluso, ya se expresó en contra de medidas preventivas implementadas por gobiernos locales y provinciales, incitando la población a protestar por la re-apertura de los establecimientos comerciales y escuelas, así como por la retomada de otras actividades presenciales, especialmente las económicas, bajo el argumento de que esto sería necesario para mantener los empleos y la economía nacional. Esta postura del gobierno se ha sumado a dos cambios seguidos de gestión en el Ministerio de Salud del país, en medio al momento más crítico de la pandemia en ámbito nacional, y también en medio a conflictos del presidente con los demás poderes del país, como el Supremo Tribunal Federal (STF).

Así, en un momento en que Brasil es reconocido como principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra. Lamentamos la absoluta ausencia de duelo por parte de la máxima autoridad del país, ante las más de veinte y una mil muertes que el país registra y extendemos todo nuestro sentimiento a las víctimas, sus familias y entes queridos, y a todo el pueblo brasileño.

Respecto al campo educativo, el presidente ha defendido la re-apertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020. Así mismo, pese a una enorme reacción pública, el gobierno manifestó que mantendría el calendario previsto para evaluaciones educativas nacionales, como el ENEM (Examen Nacional de la Enseñanza Media), lo que se discute actualmente en el Congreso Nacional. La realización de esta prueba representaría un gran perjuicio para las y los estudiantes que se encuentran alejados/os de las escuelas por la pandemia, especialmente aquellas/os de familias con menor ingresos y por lo tanto sin condiciones de seguir sus estudios a distancia, por falta de insumos y acceso a Internet, entre otros problemas sociales que enfrentan ante la coyuntura. Después de fuerte presión de la sociedad civil organizada, el Ministerio de Educación de Brasil decidió postergar la realización del ENEM.

En este contexto, reafirmamos nuestra solidaridad con la sociedad civil de Brasil y nos sumamos a las demandas de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación y de

estudiantes, docentes y otros sectores movilizados del país, que cobran medidas serias del gobierno nacional para la superación del actual contexto de crisis y por la inversión de los recursos necesarios en salud, educación y otros derechos sociales, poniendo a la vida, dignidad, salud y protección de las personas por encima de los intereses económicos. Eso implica suspender medidas injustas, inconstitucionales y que profundizan las desigualdades y a la vez adoptar caminos dialogados con la sociedad, en el sentido de fortalecer los sistemas públicos de educación y salud, con gratuidad, y velar por que se cumplan las medidas de distanciamiento social y cuidado que exige la actual coyuntura.